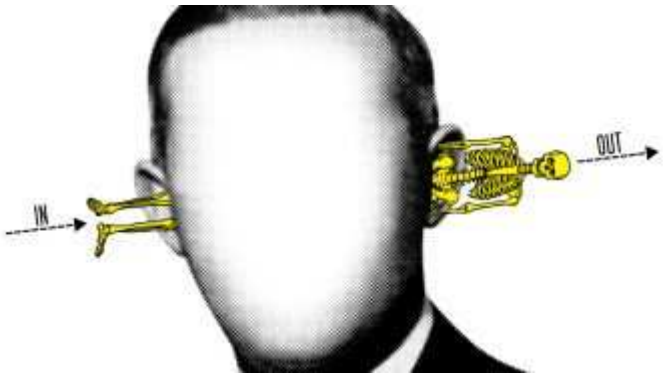
Público.es

El sesgo de los derechos humanos

08 Abr 2010

VICENÇ NAVARRO



El título del artículo se refiere al sesgo conservador mostrado por los mayores medios de difusión del país en su cobertura de las violaciones de los derechos humanos en América Latina. Imagínese el lector que se hubiera descubierto este año en Cuba una sepultura desconocida en la cual yacieran más de 2.000 personas ejecutadas por el ejército cubano en los últimos años, y que una de las personas cubanas que hubieran denunciado las desapariciones y ejecuciones de tales personas hubiera sido asesinada también por el mismo ejército. La movilización mediática por parte de los mayores medios de información hubiera sido enorme. Y más de un Gobierno, además de denunciar al Gobierno cubano, habría roto las relaciones diplomáticas con aquel país. Y, cómo no, el Parlamento Europeo (con mayoría conservadora y liberal) habría aprobado una resolución condenatoria, interrumpiendo cualquier relación diplomática y comercial con aquel país. Y, probablemente, hubiera propuesto para el Premio Nobel de la Paz a título póstumo al ciudadano asesinado por el ejército. El Gobierno federal de EEUU hubiera aumentado la avalancha mediática, política y económica en contra del Gobierno cubano, acentuando

todavía más el bloqueo económico. Y, cómo no, la prensa de mayor difusión en España criticaría, una vez más, a muchos intelectuales de izquierda por su falta de entusiasmo en su denuncia del hecho. Pues bien, los 2.000 asesinatos de desaparecidos existen, como también existía la persona que los denunció y que fue asesinada por el ejército. La única diferencia es que el país no es Cuba, sino Colombia. En aquel país, una tumba desconocida fue hallada este año, por casualidad, cerca de la base militar colombiana situada en el municipio de La Macarena, en el departamento de Meta, al sur de la capital, Bogotá. La tumba fue descubierta cuando los vecinos se percataron de que muchas personas enfermaban por beber agua de manantiales en el bosque, que había sido contaminada por lo que, como se descubrió más tarde, eran cadáveres enterrados en aquella tumba desconocida. La única señal era una bandera con las fechas del enterramiento, 2002-2009. La subsecuente investigación descubrió que había más de 2000 personas enterradas allí. El ejército colombiano reconoció su autoría, indicando que eran miembros de las guerrillas capturados o muertos en combate. Pero no explicó por qué se habían enterrado secretamente y sin seguir las mínimas reglas exigibles del registro de los muertos.

En realidad, el caso era muy parecido a otro anterior –el caso de "falsos positivos"– en que otras 2.000 personas habían sido asesinadas por el ejército, presentándolas falsamente como guerrilleras, cuando se demostró que no lo eran. Johnny Hurtado, el sindicalista y presidente del Comité de Derechos Humanos Colombiano, que había denunciado tal hallazgo, había indicado a una delegación de miembros del Parlamento de Reino Unido, de visita en Colombia, que los asesinados enterrados en la tumba de La Macarena no eran miembros de las guerrillas, sino personas que habían desaparecido y que no tenían ninguna conexión con las guerrillas (cuyas prácticas criticó y denunció). El Gobierno y las Fuerzas

Armadas estaban utilizando –según él– la lucha antiguerrilla para eliminar físicamente a todos sus opositores, presentándolos como guerrilla. Y, en ocasiones, ni siquiera eran opositores. Pero el ejército los mataba para identificarlos como guerrilleros como forma de expresar su eficacia. El 15 de marzo de este año fue asesinado Johnny Hurtado mientras soldados de la odiada y temida Brigada Móvil nº 7 patrullaban el área donde vivía. Pasó a ser el número 7 de los sindicalistas asesinados en los primeros meses del año 2010 en aquel país (en 2009 fueron 39).

Todos estos asesinatos se hicieron durante el mandado del presidente Uribe y de su ministro de Defensa Juan Manuel Santos (el candidato a la sucesión de Uribe como presidente de Colombia). Y, a pesar de sus negativas, es altamente improbable que no fueran conscientes de estos hechos, pues el ejército ha defendido tales acciones como "actos de la necesaria lucha contra la guerrilla". La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin embargo, ha pedido que se realice una investigación de las violaciones de los derechos humanos en aquel país, definidas como "sistemáticas y ampliamente extendidas", considerándolas "crímenes contra la humanidad".

Frente a esta horrible situación ha habido un silencio ensordecedor de los supuestos defensores de los derechos humanos. El Parlamento Europeo no ha dicho nada. El Gobierno de Obama (cuyas Fuerzas Armadas estaban asesorando a los militares colombianos en la base de La Macarena) va a reanudar el Tratado Bilateral con Colombia (que inició el presidente Bush con Uribe). Y los medios de mayor difusión, supuestamente defensores de los derechos humanos, han permanecido, en general, silenciosos sobre este caso. En realidad, en España, el presidente Uribe y su Gobierno han tenido muy buena prensa. Varios de los rotativos de mayor difusión han publicado entrevistas muy favorables a Uribe y a su sucesor. Y los supuestos grandes defensores de la libertad –incluyendo a Mario Vargas Llosa–

han permanecido en completo silencio. Ni que decir tiene que los portavoces de aquel Gobierno, ayudados por los medios que les ofrecerán grandes cajas de resonancia, negarán estos hechos. Mientras, los que se autodefinen como defensores de los derechos humanos, que continuamente hacen críticas (algunas de ellas justificadas) a Cuba, seguirán ignorando las horribles violaciones de tales derechos en otros países, cuyos gobiernos son considerados amigos, convirtiendo en una farsa su supuesto compromiso con los derechos humanos.